



**Consejo Económico
y Social**

Distr.
GENERAL

E/CN.4/2005/64/Add.3
26 de noviembre de 2004

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
61º período de sesiones
Tema 11 c) del programa provisional

**DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, EN PARTICULAR
LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN**

**Informe del Relator Especial sobre el derecho a la libertad
de opinión y de expresión, Sr. Ambeyi Ligabo**

Adición

MISIÓN A COLOMBIA*

* El presente resumen se distribuye en todos los idiomas oficiales. El informe, que figura en el anexo, se distribuye en el idioma en que fue presentado únicamente y en español.

Resumen

El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Sr. Ambeyi Ligabo, visitó Colombia del 22 al 29 de febrero de 2004, por invitación del Gobierno.

Colombia es un país multicultural de grandes tradiciones que ha contribuido de forma notable a la historia y el progreso del continente americano. Lamentablemente, hace 40 años que un conflicto interno obstaculiza el crecimiento económico y social del país y socava el desarrollo del sistema político. Todas las partes en el conflicto han cometido graves violaciones de los derechos humanos, de distintas formas y en diversa medida. La existencia y las incesantes actividades de la guerrilla y los grupos paramilitares han infundido miedo en la vida de los ciudadanos, lo que ha limitado considerablemente su libertad de expresión.

En este contexto, el conflicto armado ha generado o facilitado la aparición de graves impedimentos al ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión: la pandemia del tráfico de drogas; un sentimiento generalizado de inseguridad; la militarización del país; la polarización de opiniones, acompañada de la estigmatización de posiciones contrarias; y el vínculo, aunque ambiguo, entre los que fomentan la corrupción, diversos grupos armados y algunos sectores de los militares y los agentes del orden.

Los retrasos prolongados e injustificados en la investigación de los delitos, a lo que se unen muchos casos no resueltos de asesinato de periodistas, sindicalistas, maestros y defensores de los derechos humanos que, probablemente, nunca lleguen a una conclusión satisfactoria, han consolidado una arraigada cultura de impunidad que crea intimidación y aumenta el miedo en el público en general. El fenómeno recurrente de los secuestros ha sido una de las características principales de las actividades delictivas en Colombia y ha contribuido en gran medida al sentimiento de inseguridad y a la anarquía generalizada.

El deseo de ejercer la libertad de opinión y expresión es un factor fundamental en la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto y una condición de la democracia y el buen gobierno. Lamentablemente, los obstáculos ya mencionados no son favorables para la promoción de la libertad de opinión y de expresión.

Los autores de las violaciones de los derechos humanos deberían ser procesados, con independencia de su filiación política o situación en la sociedad. Las autoridades deberían examinar sus programas de protección y reforzar considerablemente la protección que se ofrece a periodistas, sindicalistas, maestros y defensores de los derechos humanos. Queda todavía mucho por hacer en lo que respecta a la seguridad de esas categorías de profesionales, especialmente los que trabajan en las zonas rurales o distantes. Es indispensable brindarles una mayor protección para que puedan continuar su labor, lo que a la vez restablecerá un nivel mínimo de seguridad compatible con la legalidad constitucional.

La reforma proyectada de la Constitución puede dar lugar a cambios radicales y debilitar fundamentalmente la aplicación de la *acción de tutela*, mecanismo judicial basado en la Constitución que tradicionalmente ha permitido proteger los derechos de todos los ciudadanos de Colombia. En segundo lugar, la reforma propuesta puede restar fuerzas a la autoridad del Tribunal Constitucional, sus funciones de fiscalización y, en definitiva, la independencia de los jueces.

El Relator Especial también expresó su preocupación a las autoridades competentes sobre la Ley antiterrorista aprobada a fines de 2003, y que finalmente se promulgó mediante la correspondiente Ley estatutaria en junio de 2004. Por esta ley, se podrían autorizar medidas de excepción como los registros corporales, la intervención de teléfonos y la vigilancia de la correspondencia privada, sin orden judicial. Tal legislación no es compatible con las disposiciones de varios instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En las zonas rurales, la situación de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los indígenas, la minoría afrocolombiana y otros grupos étnicos, es particularmente grave. Además de los fenómenos conocidos como el trabajo infantil y la explotación de las mujeres, los grupos paramilitares imponen su ley y con frecuencia detienen y encarcelan a las personas y ejercen otras formas de abuso y vejaciones. El derecho a la libertad de asociación se entorpece gravemente: independientemente de su finalidad, toda reunión será a menudo considerada como posible fuente de subversión. La incriminación de personas y grupos es una de las consecuencias más aberrantes del proceso de polarización y estigmatización de opiniones e ideas.

La existencia de numerosas radios rurales y provinciales depende de la buena voluntad del grupo armado que predomine en una zona determinada. De hecho, los trabajadores de los medios de comunicación intentan ser neutrales y se autocensuran en relación con cuestiones sensibles; los dueños de las radioemisoras suelen verse obligados a difundir comunicados del ejército o la guerrilla. Además, los grupos de los medios de comunicación nacionales ejercen una fuerte presión sobre los propietarios de los medios de comunicación independientes para convencerlos de vender sus radios y atraen a las estaciones de radio económicamente más rentables.

La concentración de la propiedad de los medios de comunicación es una de las principales causas de las malas condiciones de trabajo de los periodistas. Al reducir la independencia del periodismo se ha frenado el debate pluralista propio de una sociedad abierta y justa. La mayoría de los periodistas, que no han podido crear un sindicato a causa de la oposición de los propietarios de las publicaciones, son explotados y mal pagados. Otros están atrapados en el círculo vicioso de la venta de publicidad y la imposibilidad de trabajar normalmente, lo que explica la autocensura. Por último, el asesinato de varios colegas ha causado angustia y hecho estragos en toda esta categoría profesional.

El Relator Especial tomó conocimiento de las actividades de los departamentos de derechos humanos creados en los órganos e instituciones del Gobierno. También tomó nota de que varios altos dirigentes y responsables del Gobierno estaban dispuestos a hablar abiertamente de los derechos humanos. No obstante, estas medidas y esta buena disposición no parecen ser suficientes: por ejemplo, no hay un plan nacional de derechos humanos, el Gobierno parece haber hecho caso omiso de las recomendaciones que figuran en el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en el país, recomendaciones que serán de gran ayuda para la preparación y aplicación de las leyes y normas conforme a las disposiciones de los instrumentos fundamentales de derechos humanos ratificados por Colombia.

Anexo

**INFORME DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE EL DERECHO A LA
LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN, AMBEYI LIGABO,
SOBRE SU MISIÓN A COLOMBIA (22 A 29 DE FEBRERO DE 2004)**

ÍNDICE

| | <i>Párrafos</i> | <i>Página</i> |
|---|-----------------|---------------|
| INTRODUCCIÓN..... | 1 - 6 | 6 |
| I. ANTECEDENTES..... | 7 - 20 | 7 |
| A. La política de "seguridad democrática" del Gobierno | 8 - 11 | 7 |
| B. La guerrilla..... | 12 - 14 | 8 |
| C. Grupos paramilitares..... | 15 - 20 | 8 |
| II. LA LEGISLACIÓN ACTUAL CONTRA EL TERRORISMO Y SU APLICACIÓN..... | 21 - 32 | 9 |
| A. Marco legislativo | 21 - 26 | 9 |
| B. La Corte Constitucional | 27 - 29 | 10 |
| C. La Fiscalía General de la Nación..... | 30 - 32 | 11 |
| III. LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y EL RESPETO DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES..... | 33 - 44 | 12 |
| IV. OTROS OBSTÁCULOS A LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN | 45 - 68 | 14 |
| A. La violencia contra los medios de comunicación | 47 - 61 | 14 |
| B. Concentración de los medios de comunicación..... | 62 - 66 | 17 |
| C. Agresiones contra sindicalistas..... | 67 - 68 | 18 |
| V. MODALIDADES DE DISCRIMINACIÓN QUE ATENTAN CONTRA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN..... | 69 - 77 | 18 |
| A. Grupos étnicos | 69 - 74 | 18 |

ÍNDICE (*continuación*)

| | <i>Párrafos</i> | <i>Página</i> |
|---|-----------------|---------------|
| V. (<i>continuación</i>) | | |
| B. La discriminación racial y la pandemia del SIDA..... | 75 - 77 | 19 |
| VI. CONCLUSIONES..... | 78 - 86 | 20 |
| VII. RECOMENDACIONES | 87 - 96 | 21 |

Apéndices

| | |
|--|----|
| I. Lista de participantes en las reuniones | 24 |
| II. Tratados de derechos humanos ratificados por Colombia..... | 26 |

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento es el informe del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Sr. Ambeyi Ligabo, sobre su misión a Colombia, realizada del 22 al 29 de febrero de 2004, por invitación del Gobierno. La misión estuvo integrada por el Relator Especial, un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y dos intérpretes de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Se presentó una nota sobre la misión a la Comisión en su 60º período de sesiones (E/CN.4/2004/62/Add.4).

2. El Relator Especial desea señalar que durante los preparativos de su misión y de este informe, consultó fuentes de las Naciones Unidas, en particular los informes de 2003 y 2004 del ACNUDH en Colombia (E/CN.4/2003/13 y E/CN.4/2004/13); el quinto informe periódico de Colombia sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR/C/COL/2002/5); el tercer informe periódico presentado por Colombia al Comité contra la Tortura (CAT/C/39/Add.4) y las correspondientes conclusiones y recomendaciones del Comité (CAT/C/CR/31/1). También recibió documentación de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) que facilitaron información y opiniones constructivas sobre la situación de los derechos humanos en el país.

3. El Relator Especial desea agradecer al Gobierno de Colombia y a todas las personalidades nacionales e internacionales, partidos y grupos políticos, instituciones, representantes de los medios de comunicación, sindicatos y particulares con los que se entrevistó. Además, desea agradecer a la Oficina del ACNUDH en Colombia su valioso apoyo y asistencia.

4. Durante su visita, el Relator Especial tuvo oportunidad de conocer a varios integrantes de la sociedad civil que participan en la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, inclusive víctimas de violaciones graves de sus derechos. El Relator Especial confía plenamente en que no habrán de hacer frente a ningún tipo de represalia o intimidación de parte del Gobierno, de otras instituciones del Estado, particulares o grupos.

Programa de la visita

5. Durante la misión, el Relator Especial se entrevistó con el Vicepresidente de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Comunicaciones, personal de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el Viceministro de la Protección Social, el Vicepresidente y magistrados de la Corte Constitucional, personal de la Oficina del Vicefiscal General, el Director de la Oficina de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo y otros funcionarios del Gobierno, en especial miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El Relator Especial también se entrevistó con miembros de los partidos políticos, representantes de los medios de comunicación nacionales, grupos comunitarios que actúan en el ámbito de la información, representantes sindicales y otras ONG. Se entrevistó asimismo con periodistas que habían sido amenazados u objeto de hostigamiento. El Relator Especial tuvo ocasión de intercambiar opiniones con integrantes del cuerpo diplomático y funcionarios de varios organismos de las Naciones Unidas. En el apéndice I figura una lista de las personas con las que el Relator Especial se entrevistó.

6. El Relator Especial agradece especialmente al Vicepresidente de la República, con el que mantuvo prolongadas reuniones, al principio y al final de su misión, durante las cuales tuvo oportunidad de examinar exhaustivamente varias cuestiones de importancia primordial para el fortalecimiento de los derechos humanos en Colombia. El Relator Especial confía en que el Vicepresidente esté dispuesto a continuar el diálogo con la ayuda de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

I. ANTECEDENTES

7. El ejército, las fuerzas paramilitares y los grupos de guerrilleros de Colombia han librado una guerra civil sin cuartel e ininterrumpida desde hace 40 años. Las ejecuciones extrajudiciales, el empleo de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, las desapariciones forzadas, la toma de rehenes, los secuestros y, por último, pero no menos importante, el agravamiento de la pobreza hacen de Colombia un país donde la libre opinión y expresión resulta un ejercicio difícil. Los defensores de los derechos humanos, líderes sindicales, dignatarios de la iglesia y representantes de los medios de comunicación son algunos de los blancos más frecuentes de la guerra civil. La complejidad del conflicto hace que el simple hecho de expresar opiniones ponga al ciudadano común en peligro de sufrir represalias. Los grupos especialmente vulnerables son las mujeres, los niños, los indígenas y todos los que en el ejercicio de su derecho a la libertad de opinión y de expresión sean considerados como trabas por alguna de las partes en el conflicto.

A. La política de "seguridad democrática" del Gobierno

8. El Gobierno del Presidente Álvaro Uribe, cuya promesa de actuar enérgicamente contra los grupos de guerrilleros le aseguró una aplastante victoria electoral en 2002, se ha caracterizado por la polarización de las opiniones y la estigmatización de los opositores. Esta estrategia parece ser uno de los elementos más importantes de su Gobierno. Todo tipo de crítica, comentario u observación podría interpretarse como un ataque al Estado y causar la reacción de las fuerzas armadas regulares o paramilitares, con efectos devastadores en el debate pluralista. La lucha del Gobierno contra el terrorismo es legítima, pero no debería utilizarse en detrimento del auténtico ejercicio de la oposición política y de la labor de promoción y protección de los derechos humanos.

9. En el marco de la política de "seguridad democrática" del Gobierno, en noviembre de 2003, durante una operación militar nocturna en Arauca, las fuerzas gubernamentales detuvieron y encarcelaron a más de 300 personas acusadas de terrorismo. Los medios de comunicación nacionales habían descrito a la ciudad como un importante centro de actividades terroristas. En el momento de la visita del Relator Especial, casi todas las personas detenidas en la operación habían sido puestas en libertad. El Gobierno también está militarizando el campo por medio del programa Soldado Campesino que, en definitiva, pondrá en peligro a pueblos enteros, al exponerlos a las represalias de la guerrilla.

10. A fin de fortalecer su política de "seguridad democrática" el Gobierno también presentó al Congreso varios proyectos de ley que se examinan en otra parte del presente informe y que restringen varias de las libertades fundamentales. El Relator Especial desea destacar que estas medidas jurídicas no se ajustan a los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia (véase el apéndice II).

11. Al parecer la presión ejercida por el Gobierno para que se acate y suscriba la política de "seguridad democrática" es muy fuerte. Las instituciones del Estado parecen ser menos independientes que en el pasado y muchos de los interlocutores del Relator Especial afirmaron que la Corte Constitucional era el último bastión de la democracia.

B. La guerrilla

12. En 1966 varios grupos armados de la oposición se fusionaron y crearon las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el grupo guerrillero más importante del país, con unos 20.000 combatientes. El ELN (Ejército de Liberación Nacional) es otro grupo guerrillero aún en actividad y cuenta con unos 4.000 luchadores. Las FARC, marcadas por una fuerte orientación política, al principio eran afines a la lucha entre campesinos y terratenientes, pero se han convertido en una temible maquinaria de guerra responsable de muchas violaciones de los derechos humanos.

13. La guerrilla controla grandes zonas del territorio nacional, determina las políticas de las administraciones locales y ejerce una importante presión sobre la población local. Por consiguiente, el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en esas regiones es una actividad peligrosa. Las FARC también controlan la mayor parte del negocio de las drogas y admite que esta actividad contribuye en gran medida a mantener su poderío militar. Además de hacer participar a los civiles en la guerra, lo que de por sí es una violación de los derechos humanos, las FARC han asesinado, a varios opositores políticos y han atacado a terratenientes con el fin de secuestrarlos y de extorsionarlos. La guerrilla también ha logrado trasladar estos delitos del campo a los principales centros urbanos donde los secuestros de personas relativamente pudientes se han convertido en un verdadero flagelo.

14. Los dirigentes de las FARC y del ELN consideran a los periodistas y a los sindicalistas, así como a otras categorías profesionales, posibles blancos militares. En julio de 2002, las FARC amenazaron a ocho periodistas de Cali, acusados de ser "enemigos del pueblo y de defender los intereses de la oligarquía". Se estima que en el último decenio la guerrilla ha asesinado a tres periodistas y secuestrado a muchos otros, entre ellos periodistas extranjeros. En el momento de redactar este informe, la Sra. Ingrid Betancourt, destacada dirigente de la oposición que ha trabajado incansablemente por la reconciliación nacional, seguía siendo rehén de la guerrilla.

C. Grupos paramilitares

15. En la década de 1980, los primeros grupos paramilitares iniciaron su actividad para apoyar a los terratenientes en su afán de aumentar sus propiedades a expensas de los territorios de los indígenas. Los paramilitares, que también controlan el 40% del tráfico de drogas, se convirtieron en autores de diversas violaciones de los derechos humanos en relación con los indígenas.

16. En 1997, Carlos Castaño unificó los grupos paramilitares en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para dar una dimensión nacional a su lucha contra la guerrilla. Algunos de los "objetivos militares" de las AUC han incluido a periodistas acusados de apoyar a la guerrilla; las AUC presuntamente han intervenido en la muerte de unos 15 periodistas desde 1997, en tanto que otros 20 han preferido huir del país para escapar de los paramilitares. Los periodistas de investigación han sido con frecuencia blanco de las AUC a causa de sus investigaciones sobre la corrupción.

17. Pese a la tregua declarada unilateralmente por los grupos paramilitares a fines de 2002, se informa de que han participado en el asesinato de unas 600 personas desde entonces. También hay denuncias de vínculos estrechos entre los paramilitares y algunos sectores del Estado, especialmente el ejército. Se dice que los grupos paramilitares controlan regiones enteras, al parecer con la colaboración implícita o tácita, incluso el apoyo activo, de las autoridades del Estado. A menudo han llevado a cabo funciones del Estado vinculadas a la seguridad, sin tener competencia judicial: detenciones, control de carreteras, patrullas, registros domiciliarios y corporales, confiscación de documentos. Se dice también que actúan como personal privado de seguridad para las empresas transnacionales, que suelen ser punto de mira de las operaciones de la guerrilla.

18. Los indígenas, los campesinos y especialmente las mujeres campesinas parecen ser algunos de los blancos preferidos de los paramilitares. Además, de los asesinatos, con frecuencia estos grupos son objeto de toda clase de abusos, desde la extorsión hasta la violación. Se considera que aterrorizar a los civiles mediante tácticas como las matanzas, los asesinatos selectivos y las amenazas constituye un recurso eficaz para erradicar todo apoyo, real o supuesto, a la guerrilla. Además, los grupos paramilitares pueden ejercer una notable presión sobre los campesinos y los indígenas a fin de abrir el camino a nuevas iniciativas económicas, como la explotación del petróleo y el carbón.

19. Parece que algunos grupos paramilitares están negociando actualmente con el Gobierno su reintegración en la sociedad civil. El Presidente Uribe propone una legislación que presuntamente concederá la inmunidad a los grupos paramilitares, en el marco de un programa de desmovilización general.

20. El Relator Especial desea señalar a la atención la distinción entre las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario; a este respecto se remite a los documentos E/CN.4/2000/13, párrafo 25, E/CN.4/2001/15, párrafos 24 y 25, y E/CN.4/2002/17, párrafo 68, sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.

II. LA LEGISLACIÓN ACTUAL CONTRA EL TERRORISMO Y SU APLICACIÓN

A. Marco legislativo

21. El Gobierno de Colombia ha desplegado una intensa actividad de preparación de diversos proyectos legislativos inspirados por la aplicación de la estrategia de "seguridad democrática". Además del controvertido proyecto de ley sobre el "Estatuto Antiterrorista", el Gobierno también ha presentado otros proyectos legislativos para modificar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación y la Ley estatutaria de administración judicial.

22. Aunque la lucha del Gobierno contra el terrorismo es absolutamente legítima, se han planteado muchas objeciones respecto de los proyectos destinados a modificar la Constitución que, en definitiva, violan los derechos y las libertades fundamentales. Pese a las decisiones de la Corte Constitucional, los análisis y las observaciones de la Oficina del ACNUDH en Colombia y la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la oposición de las ONG, el Gobierno parece mantenerse firme en sus políticas y estrategias legislativas.

23. El 11 de agosto de 2002, el Presidente Uribe declaró el estado de conmoción interior y el 9 de septiembre de 2002 dictó el Decreto 2002 por el que se declaraba una especie de ley marcial en la denominada Zona de Rehabilitación y Consolidación (zonas especiales de orden público). Por el Decreto 2002 se impusieron restricciones a los derechos a la libertad de circulación y residencia, al respeto de la vida y el domicilio privados, a la libertad individual y a las garantías procesales. El 26 de noviembre de 2002, la Corte Constitucional declaró que varias de las disposiciones eran inaplicables. Pese a esa decisión, en febrero de 2003 el Gobierno aprobó el Decreto legislativo N° 245 para extender una vez más el estado de conmoción interior. La Corte Constitucional volvió a intervenir y en abril de 2003 declaró que el Decreto N° 245 era inconstitucional.

24. En enero de 2003, con el fin de facilitar la reintegración de los grupos paramilitares que hubieran declarado previamente una tregua unilateral, el Gobierno dictó el Decreto N° 128 que reglamenta y modifica las leyes anteriores. El decreto concede el indulto y otros beneficios jurídicos a todos los que acepten la desmovilización, siempre que no estén involucrados en violaciones graves de los derechos humanos. En un aparente intento de complementar el Decreto N° 128, en agosto de 2003 el Gobierno presentó al Senado el proyecto de Ley estatutaria N° 85 (2003) que comprendía disposiciones sobre la posibilidad de suspender las penas de prisión y las penas sustitutivas también para los miembros de grupos proscritos implicados en violaciones graves de los derechos humanos. El Relator Especial tomó nota de que la Oficina del ACNUDH de Colombia, al igual que otras instituciones y ONG consideran que tanto el Decreto N° 128 como la Ley estatutaria N° 85 (2003) contienen disposiciones que están en contradicción manifiesta con los tratados internacionales ratificados por Colombia.

25. En abril de 2003, el Gobierno redactó el Acto legislativo N° 223, denominado "Estatuto Antiterrorista", posteriormente aprobado por el Congreso en diciembre de 2003, que modifica algunos artículos de la Constitución. La ley autoriza a las fuerzas militares para hacer detenciones, realizar registros e interceptar comunicaciones electrónicas y telefónicas de cualquier persona de la que se sospeche que está vinculada a actividades terroristas, sin orden judicial al atribuir competencias de policía judicial a las fuerzas de seguridad, la nueva Ley antiterrorista constituye una grave amenaza a la libertad de expresión y puede aumentar la impunidad que rodea los asesinatos de periodistas y otros profesionales en Colombia.

26. En la reunión celebrada con el Vicepresidente de la República, el Relator Especial señaló que el citado acto legislativo afectaba gravemente a las libertades fundamentales y que esa legislación no era compatible con las disposiciones de varios instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No obstante, el 20 de junio de 2004 se aprobó una Ley habilitante del contenido del Decreto.

B. La Corte Constitucional

27. En su reunión con la Corte Constitucional, el Relator Especial declaró que se valoraba mucho la labor de la Corte que consiste en velar por que las leyes nacionales sean conformes a las normas internacionales, en particular sus decisiones sobre el Decreto 2002. La Corte puso al Relator Especial al corriente de sus principales actividades y decisiones en materia de leyes de excepción, protección de los profesionales de los medios de comunicación, reglamentaciones para los casos de difamación y *acción de tutela*, cuestión que el Relator Especial y la Corte

Constitucional examinaron a fondo, especialmente en relación con la reforma propuesta por el Gobierno en octubre de 2002 por el Acto legislativo N° 10 de 2002, a fin de modificar determinadas disposiciones de la Constitución sobre la administración de justicia. La ley proponía modificar, en particular, la *tutela* que, según la Constitución, habilita a los ciudadanos a recurrir una violación de un derecho constitucional ante un tribunal, que tiene un plazo de 10 días para adoptar una decisión. La reforma propuesta por el Gobierno impediría la aplicación de la *tutela* en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular los derechos de los grupos vulnerables como los niños y las personas mayores, además del derecho a la revisión de las normas judiciales arbitrarias.

28. La Corte Constitucional también ha tratado otros asuntos como la estigmatización de las opiniones de los ciudadanos en la prensa, el derecho a la libertad de conciencia y de creencias, y el derecho a la intimidad. A consecuencia del conflicto interno, los ciudadanos normales están actualmente poco dispuestos a expresar sus opiniones y por lo tanto se autocensuran.

29. La Corte desea mantenerse vigilante en el marco de sus atribuciones y competencias judiciales en lo que respecta al intento de socavar la independencia del poder judicial. El proyecto de reforma constitucional propuesto por el Gobierno podría debilitar en gran medida las atribuciones de la Corte Constitucional y por consiguiente reduciría la posibilidad de una aplicación imparcial del derecho a la libertad de opinión y de expresión, cuestión sobre la cual la Corte ha creado una amplia jurisprudencia.

C. La Fiscalía General de la Nación

30. En la reunión celebrada con la Fiscalía General de la Nación, el Relator Especial pidió información sobre varios periodistas detenidos, en particular sobre las acusaciones que pesaban sobre ellos. También pidió más información sobre la situación de los procesos contra los presuntos asesinos de periodistas y sindicalistas. Unos días más tarde, la Fiscalía General de la Nación facilitó al Relator Especial un documento con información actualizada sobre cada uno de los casos y los procesos en curso. Al volver de su misión en Colombia, el Relator Especial envió una carta a la Fiscalía para solicitarle más información sobre varios casos considerados de particular gravedad.

31. En relación con la marcha de los procesos, el Vicefiscal General dijo que la Fiscalía estaba intentando acelerar varios procesos, pero protegiendo los derechos de los demandados. Añadió que la Fiscalía estaba especialmente bien organizada para las investigaciones sobre los delitos más graves, como los asesinatos de periodistas, que violaban la esencia de la democracia en Colombia. En 1999, el Fiscal General creó un grupo especial de cuatro jueces instructores para ocuparse exclusivamente de los casos de periodistas. Asimismo, un grupo de fiscales se ocupaba específicamente de las violaciones de los derechos humanos a la luz del derecho nacional e internacional; además, los fiscales prestaban especial atención a la compatibilidad de sus decisiones con los tratados internacionales ratificados por Colombia.

32. En respuesta a la pregunta del Relator Especial sobre los principales obstáculos a los que debe hacer frente el Fiscal General, el Vicefiscal General dijo que las investigaciones de los asesinatos de periodistas habían resultado muy difíciles. En su opinión, esos actos se realizaban para silenciar a la prensa y, en última instancia, pero no por ello menos importante, para

atemorizar a la población que, por lo general, estaba muy poco dispuesta a facilitar información a los investigadores. Se indicó también que, a causa del alto grado de violencia del conflicto, el Fiscal General y los fiscales eran considerados como blancos, al igual que los integrantes de la sociedad civil.

III. LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y EL RESPETO DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES

33. Uno de los temas importantes de debate a alto nivel durante la visita del Relator Especial fue la protección y la mejora de la seguridad de las categorías profesionales en riesgo. Por una parte, las ONG y otras entidades señalaron que el programa de protección del Ministerio del Interior presentaba deficiencias estructurales, como la dudosa eficacia de la protección, que solía deberse a la relación desigual entre el ciudadano que necesita la protección y las autoridades, y al tiempo que se tardaba en obtener la protección a menudo meses. Por otra parte, el Vicepresidente destacó que el principal inconveniente era la falta de recursos financieros adicionales y que el Gobierno se preocupaba de reforzar la seguridad de todos los ciudadanos, prestando especial atención a los grupos vulnerables.

El programa de protección del Ministerio del Interior

34. El Relator Especial celebró una larga reunión con el titular de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, con el Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y con el jefe del programa de protección del Ministerio del Interior. El Relator Especial se interesó en particular por las modalidades de funcionamiento del programa de protección, sus posibles inconvenientes, y las medidas que se adoptaban para solucionar los problemas más graves.

35. El titular de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior dijo que el programa de protección era un elemento importante de la política de "seguridad democrática" del Presidente Uribe. El Gobierno aumentó el presupuesto del programa de 201 millones de pesos en 2001 a 665 millones en 2003: en 2002 se contrató para el programa a 285 personas y en 2003 a otras 85. Se ha establecido un Comité encargado de evaluar el nivel de riesgo, integrado por el Viceministro del Interior, el Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, el jefe del programa de protección, un miembro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un representante del Ministerio de la Protección Social, un funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Colombia, que participa en calidad de observador y representantes de dos ONG, Medios para la Paz y la Fundación por la Libertad de Prensa. Generalmente el Comité se reúne una vez al mes, pero si es necesario puede reunirse en cualquier momento.

36. El Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos declaró que la descentralización del programa de protección incrementaría su eficiencia y el aumento de la presencia policial en todos los centros urbanos de Colombia contribuiría a consolidar el orden público y proporcionaría más seguridad a todos los ciudadanos. Los primeros en beneficiarse de

la descentralización serían los periodistas que investigaban casos de corrupción, ya que eran las víctimas más frecuentes de agresiones y asesinatos. En este sentido, lamentó la existencia de obstáculos, en particular la falta de confianza mutua, que dañaban la relación entre los medios de comunicación y las fuerzas del orden.

37. El Relator Especial se reunió con varios periodistas nacionales y extranjeros que reiteraron una serie de cuestiones que al parecer constituyen los principales obstáculos al libre ejercicio del derecho a la información. Una de las principales preocupaciones era la protección de los periodistas: en opinión de muchos de los interlocutores del Relator Especial, el programa de protección del Ministerio del Interior no disponía de fondos suficientes y tendría que responder mejor a la petición de ayuda de los periodistas. Sin olvidar, por último, que el Gobierno debía comprometerse más al respecto. Se informó de que al menos diez periodistas habían tenido que huir del país en los últimos meses y que las ONG de derechos humanos a menudo conseguían enviar a los periodistas amenazados a países occidentales durante un tiempo.

38. Se presentó al Relator Especial un panorama general del programa de protección, que incluye formación específica para que los periodistas mejoren su percepción de la seguridad. De hecho, muchos periodistas tienden a subestimar ciertos riesgos y se olvidan de las precauciones elementales. La policía prevé crear para los participantes en el programa de protección una red nacional de radio que permita a los agentes del orden reaccionar con rapidez; los principales beneficiarios de este sistema serán los reporteros que trabajan en áreas remotas y rurales.

39. El Relator Especial se reunió con cinco periodistas que habían recibido amenazas de muerte y se habían inscrito en el programa de protección. Todos ellos habían huido del país y habían vivido en el exilio durante años, a veces con ayuda de las autoridades colombianas. Sus relatos muestran que el peligro puede provenir de todas las partes del conflicto y que, al menos en un caso, se sospechó de colusión entre delincuentes y agentes de los cuerpos de seguridad.

40. Un periodista dijo que su terrible experiencia había empezado cuando los agentes lo calificaron de partidario de las FARC. Aunque no fue acusado oficialmente, los grupos paramilitares comenzaron a intimidarlo mediante llamadas telefónicas, por escrito y una única agresión física. Al final, decidió solicitar asilo político en un país europeo y pasó 15 años en el extranjero.

41. Otro periodista dijo al Relator Especial que un país occidental lo había admitido con su familia como refugiado después de que los hubieran obligado a abandonar su ciudad natal en una región rural. Al parecer, lo consideraban "enemigo del pueblo" porque trabajaba en medios de comunicación estatales y había informado sobre atentados con bombas. Cuando los guerrilleros le confiscaron su equipo, decidió trasladarse a Bogotá pero se dio cuenta de que las amenazas continuarían regularmente, sobre todo mediante llamadas telefónicas.

42. La investigación del asesinato de un colega supuso el comienzo de los problemas de otra reportera, que ya había pasado un año en el extranjero. Aunque está incluida en el programa de protección, la reportera creía que su situación seguía siendo sumamente precaria porque no se había terminado de investigar su caso y porque el programa de protección servía únicamente para controlar sus movimientos y actividades.

43. La cuarta periodista dijo al Relator Especial que se había inscrito voluntariamente en el programa de protección y que le habían entregado un teléfono móvil y dinero para contratar a un chófer. Ha recibido dos amenazas de muerte porque se ocupa de asuntos indígenas y rurales y del proceso de paz negociado por el Presidente Pastrana. Sus familiares también han recibido amenazas, aunque no participan en el trabajo informativo, y le robaron su equipo del apartamento.

44. El último periodista dijo que lo habían secuestrado cuando investigaba el fenómeno de los secuestros; varios periodistas más habían tenido la misma experiencia. Desde entonces, va acompañado constantemente por guardaespaldas porque los secuestros, que en la actualidad son un fenómeno delictivo de por sí, constituyen un tema muy peligroso y ambas partes en el conflicto pueden reaccionar violentamente.

IV. OTROS OBSTÁCULOS A LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN

45. La información facilitada al Relator Especial por el Ministerio de Comunicaciones presentaba un entorno mediático rico y variado, particularmente activo en el ámbito del desarrollo social de los grupos vulnerables. El Ministerio adjudicó licencias a 478 emisoras de radio comunitarias por concurso público, mientras que se concedieron 213 licencias a organismos públicos como las universidades, el ejército y los municipios. El Gobierno también donó equipo técnico a 14 emisoras gestionadas por indígenas. El Ministerio se ocupaba asimismo de las necesidades específicas de las tareas rurales: la red de telefonía cubre ahora el 83% del territorio y funcionan en el país 309 telecentros. La Comisión Nacional de Televisión, creada en 1991 y compuesta por representantes de la Presidencia y por especialistas, vela por que las televisiones públicas y privadas respeten la legislación nacional.

46. En respuesta a una serie de preguntas formuladas por el Relator Especial, el Ministro dijo que las emisoras de radio comunitarias sin fines de lucro podían emitir anuncios publicitarios durante 15 minutos por hora, sin restricciones en cuanto al contenido, siempre que respetaran la opinión pública, el sentido común y la moralidad. Las emisoras comunitarias también son libres de abordar todos los temas sociales, pero no pueden emitir propaganda política. El Gobierno está examinando la cuestión de los anuncios comerciales que actualmente no tienen límites de duración en las emisoras de radio privadas. A la inversa, en interés público, los anuncios han sido sustituidos por una fórmula de patrocinio de programas, con duración precisa.

A. La violencia contra los medios de comunicación

47. Otra de las cuestiones fundamentales tratadas en las reuniones que el Relator Especial mantuvo con los profesionales de la comunicación fue la estigmatización de los periodistas por el Estado. Ésta debilita la posición de la prensa y la vuelve más vulnerable, especialmente si, como suele suceder, va acompañada de la acusación de apoyar a la guerrilla.

48. Otro asunto destacado fue la impunidad. También se indicó que los juicios de las personas acusadas de asesinar a periodistas, y a defensores de los derechos humanos, sindicalistas, profesores y trabajadores sociales, generalmente son muy largos y muy polémicos. En general, los interlocutores del Relator Especial creían que la policía realizaba una investigación muy

desorganizada de los casos y que los procesos judiciales muy lentos. El proceso de los presuntos asesinos del periodista de televisión Jaime Garzón en 1999 constituye un buen ejemplo: 52 meses después de su asesinato, todavía no se está desarrollando el juicio de manera satisfactoria. Según las asociaciones de profesionales de la información y otras ONG, en los últimos 15 años las autoridades, aparentemente, sólo han resuelto 35 de los 112 asesinatos de periodistas.

49. Posteriormente, el Relator Especial se enteró de que el 10 de marzo de 2004 un tribunal colombiano condenó en ausencia a Carlos Castaño, líder de las AUC, a 38 años de prisión por el asesinato de Jaime Garzón. Al parecer, el juicio se vio empañado por una mala investigación y falsos testimonios. El juez presidente decidió ordenar una investigación sobre la participación de varios funcionarios del DAS.

50. Según los datos y los informes obtenidos por el Relator Especial, en el año 2003, fueron asesinados cinco periodistas y cerca de 60 fueron secuestrados, amenazados o agredidos y muchos se vieron obligados a abandonar su región, si no el propio país. Al parecer, las regiones más peligrosas para la seguridad de los periodistas fueron Boyaca, Arauca y Santander: 16 trabajadores de los medios de información huyeron de la región de Arauca amenazados de muerte, y 6 tuvieron que huir del país. El Relator Especial desea señalar a la atención una vez más los casos que se citan a continuación.

51. En 2004 mataron a un periodista y secuestraron y torturaron a uno de sus colegas. El 4 de febrero de 2004 en Cartago, Departamento del Valle del Cauca mataron a tiros a Óscar Alberto Polanco Herrera, director del programa informativo local "CNC Noticias" de Cable Unión de Occidente.

52. La periodista y activista de los derechos humanos Inés Peña fue agredida y torturada en Barrancabermeja, departamento de Santander, el 28 de enero de 2004. La Sra. Peña, de 22 años, pertenece a la sección juvenil del grupo de defensa de los derechos de la mujer Organización Femenina Popular y presenta la sección "Cultura por la vida" del programa de televisión "La Mohana", emitido por la televisión privada Canal Enlace 10 de Barrancabermeja. Al parecer, sus agresores se identificaron como miembros de las AUC.

53. Cuando redactó el informe, el Relator Especial había recibido información fidedigna sobre varios casos más de agresiones contra profesionales de la comunicación sucedidos en 2004. La intervención del Relator Especial con respecto a estos casos y las posibles respuestas del Gobierno de Colombia se recogerán en el informe sobre las comunicaciones por el Relator Especial, que será presentado en el 61º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

54. El Relator Especial también quiere reiterar su preocupación acerca de varias agresiones a periodistas que le fueron señaladas en 2003. Al periodista William Soto Cheng, de 46 años, que trabajaba en la emisora de televisión local Telemar, fue asesinado con disparos a quemarropa por dos hombres en Buenaventura el 18 de diciembre de 2003. El Sr. Cheng se había pronunciado contra la corrupción y las irregularidades en las votaciones, implicando a autoridades electas y a miembros de las fuerzas de seguridad. En su programa "Litoral Pacífico", denunciaba

sistemáticamente las irregularidades presuntamente cometidas por funcionarios locales y personalidades de la región. También había denunciado fraude electoral el día siguiente de las elecciones municipales el 26 de octubre, sugiriendo que estaban implicados miembros del ejército y de la policía.

55. El periodista radiofónico de 25 años Juan Carlos Benavídez, un reportero de la radio comunitaria Manantial Estereo, recibió un tiro fatal por la espalda disparado por miembros de las FARC cuando, según se afirma, su coche no se detuvo en un control de carretera el 22 de agosto de 2003. Otro reportero de la emisora, Jaime Conrado, resultó herido en el vientre.

56. Jaime Rengifo fue asesinado a tiros al alba en Maicao, departamento de La Guajira, por dos hombres el 29 de abril de 2003. El programa radiofónico del Sr. Rengifo, "Periodistas en acción", de Radio Olímpica, recogía las críticas de los oyentes acerca de las empresas públicas, las autoridades locales, el ejército y la policía. El Sr. Rengifo había iniciado una nueva publicación en febrero, *El Guajiro*, que se distribuía en Maracaibo y Bogotá, así como localmente. Poco antes había señalado a la atención la violencia y la corrupción obra de bandas de delincuentes locales y de grupos paramilitares. A finales de 2002 había participado en una campaña local para conseguir que la eléctrica Electrocaribe rebajara sus tarifas.

57. El productor y presentador del programa "Hechos y cifras" en la televisión local Altavisión, Guillermo Bravo fue abatido por cuatro pistoleros el 25 de abril de 2003 junto a su casa de Neiva, departamento de Huila. Los familiares y colegas dijeron que al Sr. Bravo se le consideraba un periodista "de izquierdas" y que hacía tiempo que recibía amenazas de muerte.

58. El periodista Louis Edoardo Alfonso fue asesinado a tiros por dos hombres en la puerta de la emisora Meridiano 70, en Arauca, el 18 de marzo de 2003. El Sr. Alfonso, de 33 años era codirector del programa de noticias "Actualidad Informativa". Además era corresponsal del diario *El Tiempo* y trabajaba como asesor de prensa del congresista Adalberto Jaimes. El Sr. Alfonso, que supuestamente gozaba de protección estatal, estaba especializado en la cobertura de asuntos de orden público y municipales locales.

59. El periodista radiofónico Emiro Goyeneche fue detenido en el departamento de Arauca el 20 de agosto de 2003 bajo sospecha de colaboración con las guerrillas del ELN. El Sr. Goyeneche, uno de los principales presentadores de la radio Sarare Estereo, fue detenido junto con otras 29 personas por "rebelión" y encarcelado a partir del 22 de agosto. Poco antes de que finalizara su misión, las autoridades estatales informaron al Relator Especial de que el Sr. Goyeneche seguía recluido en una cárcel de mediana seguridad y que se encontraba en buenas condiciones físicas.

60. El Relator Especial también recibió información fidedigna sobre la existencia de "listas negras" preparadas por las guerrillas y las AUC, en las que figuran periodistas y reporteros cuyas actividades merecen castigo. No es de extrañar que las listas sean prácticamente idénticas e incluyan los nombres de periodistas asesinados recientemente.

61. Durante la misión, la Dirección de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores en cartas de fecha 24 y 26 de febrero de 2004, comunicó al Relator Especial las últimas noticias sobre varios casos de violación de la libertad de opinión y de expresión, entre ellos el asesinato de periodistas, comunicados en 2003.

B. Concentración de los medios de comunicación

62. La concentración de los medios de comunicación da origen a una serie de fenómenos inquietantes como la autocensura y la desaparición del periodismo profesional de investigación. Con el fin de conservar su puesto y su salario, y acuciados por el miedo de convertirse en objetivo de grupos paramilitares, muchos periodistas han preferido actuar con discreción o, en muchos casos, sumarse a la corriente de opinión política dominante. Se subrayó que la prensa colombiana raramente daba cabida a opiniones y análisis distintos de las ideas del Gobierno.

63. Muchos profesionales de los medios de información hablaron con el Relator Especial de la concentración de los medios de comunicación, calificada a menudo de cuasi monopolio, en manos de unos pocos propietarios. Una consecuencia importante es la relación entre las agencias de publicidad y las condiciones de trabajo de los periodistas (véase el párrafo 66 *infra*). Está en juego el pluralismo. De hecho, cada vez hay menos medios de comunicación independientes: sólo queda un periódico nacional, *El Tiempo*, y dos revistas semanales, la revista *Cambio* y la revista *Semana*. Huelga decir que con algunas excepciones como las radios comunitarias, las emisoras de radio y televisión pertenecen a los grandes grupos económicos. Esta información contrasta con las cifras facilitadas por el Ministerio de Comunicaciones acerca de 17 publicaciones distribuidas a nivel nacional, entre ellas periódicos, semanarios y publicaciones mensuales, 27 publicaciones regionales y aproximadamente 100 publicaciones locales.

64. También se indicó que sólo el 51% de los periodistas tenían un contrato por tiempo indefinido y que su ingreso medio era de 400 dólares de los EE.UU., igual que el de los taxistas. Los periodistas mejor remunerados ganan 1.000 dólares, pero la única manera de conseguir un salario alto es trabajar con un político o un partido político importante. La inseguridad laboral, la inexistencia de un sindicato, la falta de un sistema efectivo de pensiones y la falta de seguridad contribuyen a mermar la calidad del periodismo y la independencia de los periodistas.

65. Un representante del semanario *VOZ*, órgano del Partido Comunista, dijo que, a pesar de estar amparados por el plan de protección, no hacía mucho que habían asesinado a dos de sus corresponsales y que habían puesto dos bombas en su oficina principal. La Fiscalía investigó los delitos, aparentemente, sin resultado. Añadió que *VOZ* se había publicado durante 47 años sin interrupción y que en sus mejores años vendía 70.000 ejemplares por semana mientras que en la actualidad vendía 6.000. En los departamentos de Putumayo, Arauca y gran parte de Antioquia, la revista no está disponible en todos los sitios: sus distribuidores están amenazados y para el ciudadano común comprar un ejemplar de *VOZ* puede resultar peligroso.

66. Un profesional de los medios de información dijo al Relator Especial que muchos periodistas se habían visto obligados a abandonar su trabajo, y con frecuencia a dejar sus ciudades, por las amenazas de las FARC o grupos paramilitares. Opinaba que la nueva legislación antiterrorista sólo iba a reforzar el dominio del Gobierno sobre los medios de comunicación. En la región donde trabajaba los principales obstáculos a la libre circulación de los medios de comunicación eran tanto físicos como técnicos: la prensa debía distribuirse según ciertas reglas y su contenido debía corresponder a la orientación política del grupo militar dominante en la región, de lo contrario confiscaban y destruían los vehículos de los distribuidores y las publicaciones y amenazaban a los conductores de las furgonetas. Los anunciantes imponían muchas limitaciones, especialmente en la radio: los periodistas

también tenían que vender espacio publicitario para poder trabajar. Los posibles clientes sólo compraban espacio publicitario en los medios de comunicación tolerados por los militares y/o los grupos políticos que controlaban la región. Aparentemente, esta práctica era muy corriente durante los gobiernos anteriores. En materia política, tradicionalmente, el director del medio respectivo marca las pautas generales y decide en última instancia.

C. Agresiones contra sindicalistas

67. El Relator Especial también recibió denuncias de numerosas tentativas de asesinato, amenazas, agresiones y desapariciones, en su mayoría impunes hasta la fecha, de sindicalistas, trabajadores sociales y defensores de los derechos humanos. Los sectores sindicales más afectados seguían siendo la educación y la salud y más concretamente sindicatos como SINTRAEMCALI (trabajadores municipales de Cali), ANTHOC (trabajadores del sector de la salud), FECODE (educadores) y FENSUAGRO (trabajadores agrarios).

68. La mayoría de estas violaciones se atribuía a grupos paramilitares. Entre los casos concretos están las violaciones perpetradas contra líderes y miembros de la Unión Sindical Obrera, como el asesinato en Barrancabermeja el 20 de marzo de 2002 de Jaime Torra, que estaba amparado por el programa de protección del Ministerio del Interior, y de César Gómez, Presidente de la Sección de Pamplona del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL), asesinado presuntamente por grupos paramilitares el 5 de septiembre de 2002 en Norte de Santander.

V. MODALIDADES DE DISCRIMINACIÓN QUE ATENTAN CONTRA EL DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN

A. Grupos étnicos

69. De acuerdo con el carácter y el espíritu de su mandato, el Relator Especial sigue muy preocupado respecto de las posibilidades que tienen los grupos vulnerables de expresar sus opiniones y de tener pleno acceso a la información. En Colombia, el Relator Especial observó que los grupos étnicos seguían siendo víctimas de violaciones de sus derechos civiles y políticos, en especial el derecho a la vida, así como de discriminación racial, intolerancia y marginación social. Sus derechos económicos, sociales y culturales se ven afectados por las condiciones de pobreza y marginación en que se encuentran. El conflicto armado agrava aún más esta situación y amenaza, en consecuencia, la existencia misma de varios de estos grupos. De particular preocupación es la situación de la población afrocolombiana, considerada como una de las más pobres del país. Las comunidades indígenas y afrocolombianas, y en especial sus dirigentes, siguen siendo víctimas de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, amenazas de muerte, desapariciones forzadas, desplazamientos y reclutamientos obligatorios, lo que pone en peligro su existencia como grupos étnicos y su supervivencia cultural.

70. Durante su misión, el Relator Especial se reunió con representantes de organizaciones afrocolombianas que expresaron el deseo de que los medios de comunicación nacionales concedieran suficiente espacio a la presentación de cuestiones relativas a las poblaciones indígenas. En su opinión, los medios de comunicación proyectan una imagen distorsionada de la comunidad afrocolombiana, a la que se suele presentar como una población subdesarrollada que

vive en guetos urbanos y que se gana la vida con actividades delictivas. En el artículo 20 de la Ley N° 355, de diciembre de 1996, se establece que las poblaciones indígenas deben tener acceso a los medios de comunicación, especialmente a la televisión aunque, por lo visto, esta ley no se ha aplicado; el Estado parece tener buenas intenciones pero, según afirma, carece de fondos para tomar medidas.

71. Los pueblos indígenas desean que se tengan en cuenta sus opiniones y que se garantice una representación justa de sus cuatro principios rectores, a saber, autonomía, cultura, unidad y territorio. El hecho de que no haya periodistas profesionales de ascendencia indígena es sintomático de las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas para comunicar su realidad a los demás colombianos.

72. Las actuales decisiones del Gobierno en materia de formulación de políticas han reducido aún más el disfrute de los derechos humanos por los pueblos indígenas. La privatización y monopolización incompasivas de los recursos en un contexto de violencia han destruido fundamentalmente el entorno económico de las zonas rurales. Privados de sus actividades económicas tradicionales y de la propiedad de la tierra, y víctimas sistemáticas del conflicto armado y sus consecuencias, muchos afrocolombianos son desplazados internamente, a pesar de la garantía constitucional de la propiedad sobre sus tierras ancestrales, que ocupan 5 millones de ha. Hoy en día, el verdadero desafío consiste en garantizar su supervivencia física. Los pueblos indígenas han pagado el precio más alto en el conflicto armado, al ser acusados con frecuencia, sin ninguna prueba efectiva, de actividades terroristas.

73. Por ejemplo, el Relator Especial recibió información sobre el reciente desplazamiento de unos 400 indígenas wayuú de La Guajira, región septentrional de Colombia situada en la frontera con Venezuela. La Guajira es una región rica en petróleo y carbón en la que las empresas transnacionales tienen intereses importantes. Se afirma que treinta wayuus fueron asesinados con el fin de intimidar y ahuyentar al resto de la comunidad.

74. El Relator Especial también está enterado de la persistente discriminación, marginación y estigmatización de que son víctimas los raizales (criollos anglófonos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, provenientes de las Antillas), y los romaníes (gitanos) que todavía no tienen un estatuto jurídico específico para su protección y desarrollo.

B. La discriminación racial y la pandemia del SIDA

75. De acuerdo con el carácter y el espíritu de su mandato, el Relator Especial considera que todos los ciudadanos, cualquiera que sea su orientación sexual, tienen derecho a expresarse y a procurar, recibir y difundir información. El Relator Especial considera también que los gobiernos tienen la obligación de proporcionar a sus ciudadanos información confiable sobre cuestiones relacionadas con la salud, en general y, teniendo en cuenta la extrema gravedad de la epidemia, sobre el SIDA, en particular.

76. En Colombia, pese al papel decisivo que desempeñan las mujeres en casi todos los ámbitos de la sociedad, en las cuestiones relativas al sexo todavía predomina el hombre. Por ejemplo, los funcionarios del Gobierno han empleado con frecuencia conceptos como "homosexualidad" y términos como "homosexual" para denigrar a sus opositores políticos. El derecho a la libertad de opinión y de expresión de los grupos de homosexuales y lesbianas a menudo se ve limitado por

la resistencia que oponen los medios de difusión, en los que los temas sexuales, y especialmente la homosexualidad, se presentan de manera conservadora y tradicional y nunca en horarios principales.

77. En la reunión que sostuvo con representantes del Ministerio de la Protección Social, el Relator Especial tuvo conocimiento de que los homosexuales y prostitutas eran víctimas de grave discriminación y estigmatización, pues se les consideraba responsables de la propagación del SIDA en el país. El Ministerio declaró que la estigmatización de los homosexuales no tenía fundamento ya que había igual número de personas infectadas entre los heterosexuales y los homosexuales o bisexuales. El Ministerio también señaló a la atención del Relator Especial el Decreto 1543 de 1997, especialmente los artículos 16, 17, 32, 42 y 43, relativos a la educación sobre salud sexual y reproductiva, la confidencialidad y el derecho y el deber de promover la prevención de las enfermedades contagiosas. El Tribunal Constitucional tomó medidas en varios casos de discriminación contra grupos vulnerables, tales como las personas afectadas por el VIH/SIDA, a las que se debe garantizar siempre el derecho a la salud.

VI. CONCLUSIONES

78. La libertad de opinión, expresión e información se ha visto vulnerada por varias medidas adoptadas por el Gobierno, como la política de "seguridad democrática". No puede haber seguridad sin democracia. Los grupos paramilitares y la guerrilla han cometido graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en contra de periodistas, sindicalistas, maestros y defensores de los derechos humanos. Las amenazas de muerte han llevado a varias personas en peligro a solicitar asilo político o a salir temporalmente del país. Todo esto, sumado al alto grado de impunidad y al clima de hostilidad generado por la situación imperante, ha afectado al derecho fundamental de la población a recibir información imparcial y objetiva y al derecho de los grupos de profesionales mencionados a una plena libertad de expresión. Esas libertades también se han visto menoscabadas por la falta de un entorno pluralista, la concentración de los medios de comunicación social, la escasez de información exacta de diferentes fuentes y la autocensura.

79. El Gobierno debería hacer de la lucha contra la impunidad su principal prioridad. Se debe llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de los derechos humanos, cualquiera que sea su afiliación política. El sistema judicial debe funcionar con eficacia e imparcialidad, respetando la legislación nacional de conformidad con el derecho internacional.

80. Otra cuestión fundamental es la existencia de los grupos paramilitares que están afectando la vida de muchos ciudadanos y obstaculizando en gran medida su libertad de expresión. Se deben tomar más medidas contra esos grupos y deben cortarse todos los vínculos entre ellos y las autoridades e instituciones legítimas. A este respecto, el Relator Especial considera que con la militarización de las zonas rurales mediante el programa "Soldado Campesino" sólo se logrará generalizar el temor y la inquietud en las poblaciones locales, especialmente los grupos vulnerables como los pueblos indígenas, los campesinos, las mujeres y los niños.

81. No existe ningún motivo político que justifique las acciones de la guerrilla, que se ha comportado como una amplia red delictiva para la cual los derechos humanos y el derecho a la vida son meramente simbólicos. No obstante, para el futuro del país es fundamental que se

reanuden las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla. El proceso conducente a la reconciliación nacional y la reunificación del país podrá ser largo y penoso, pero es el único medio de garantizar una democracia estable y una sociedad pluralista en Colombia.

82. La estigmatización mediante declaraciones públicas pone en peligro la vida de algunos dirigentes y suscita dudas sobre la legitimidad del movimiento sindical. La estigmatización no favorece el libre ejercicio de las funciones de los dirigentes sindicales como defensores de los derechos sindicales, ni el pleno disfrute de la libertad de asociación y reunión pacífica.

83. Es sumamente importante que se refuerce el programa de protección a los periodistas, sindicalistas, maestros y defensores de derechos humanos. El Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior hizo una presentación exhaustiva sobre el programa y sus resultados, sin embargo el Relator Especial considera que se debe hacer más aún para garantizar la protección y la seguridad de esos grupos, especialmente de aquellos que viven en las zonas rurales o apartadas.

84. La Ley antiterrorismo aprobada a fines de 2003 también es motivo de especial preocupación para el Relator Especial. El 20 de agosto de 2004, el Tribunal Constitucional declaró dicha ley anticonstitucional. La ley confiere al ejército facultades propias del estado de excepción, como registros corporales, intervención de teléfonos y control de la correspondencia privada sin autorización judicial. Tales medidas sin duda agravarán la ya precaria situación del derecho a la libertad de opinión y de expresión y echarán por tierra el pluralismo. Además, el Relator Especial reitera que tal legislación no es compatible con lo dispuesto en varios instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

85. Otro aspecto importante que el Relator Especial desearía señalar a la atención es la actual concentración de los medios de información en manos de unos pocos propietarios, y sus consecuencias. La mayoría de los periodistas son explotados y están muy mal pagados; sin embargo, no pueden establecer un sindicato debido a la oposición de los propietarios de los medios. La relación entre la venta de publicidad y el periodista impone una enorme presión sobre los periodistas y su independencia. Los asesinatos de colegas y el temor a perder el trabajo han dado lugar a la autocensura y a un consenso silencioso respecto de las decisiones del Gobierno y de las actividades de los grupos paramilitares.

86. Los pueblos indígenas, la minoría afrocolombiana y otros grupos étnicos son parte constitutiva de la sociedad colombiana. Según parece, ellos siguen siendo víctimas de discriminación, intolerancia y marginación social. Se ha descuidado el derecho de esos grupos a expresar sus opiniones y a participar en el proceso de adopción de decisiones, especialmente en los territorios en que se encuentran, a pesar de las medidas legislativas concretas que se han adoptado.

VII. RECOMENDACIONES

87. El Relator Especial insta al Gobierno y a todas las partes en el conflicto a que reanuden el proceso de reconciliación y reconstrucción del país.

88. El Relator Especial exhorta al Gobierno de Colombia a que considere la posibilidad de preparar y aplicar un plan nacional de derechos humanos que incluya las prioridades más urgentes para la protección de todos los derechos humanos de los ciudadanos y la promoción de una cultura de derechos humanos.

89. El Relator Especial recomienda encarecidamente al Gobierno de Colombia que restablezca el estado de derecho en todo su territorio, declare oficialmente que todas las milicias son ilegales y las disuelva, y que enjuicie a los responsables de violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario, cualquiera que sea su afiliación política. El Gobierno debe hacer de la lucha contra la impunidad una de sus principales prioridades y velar por que el programa de protección a los periodistas, sindicalistas y defensores de los derechos humanos sea plenamente confiable. El Relator Especial invita a los Gobiernos e instituciones extranjeras, en cooperación con las autoridades colombianas, a que aporten una contribución financiera a la aplicación de este programa y a que consideren favorablemente las solicitudes de asilo temporal o permanente.

90. El Relator Especial recuerda al Gobierno de Colombia que el enjuiciamiento imparcial de todos los sospechosos de haber cometido violaciones de derechos humanos, cualquiera que sea su afiliación política, será un pilar fundamental del proceso de reconciliación. En última instancia, sólo un sistema judicial plenamente independiente puede garantizar la aplicación imparcial de las leyes y normas. Las investigaciones y los juicios deben llevarse a cabo de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos. Del mismo modo, los sospechosos, los inculpados y los condenados deben ser detenidos y tratados de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario.

91. El Relator Especial insta al Gobierno a que prepare proyectos de ley y leyes concretas sobre las actividades de lucha contra el terrorismo que sean compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario ratificados por Colombia. A este respecto, el Relator Especial insta al Gobierno a que considere favorablemente las observaciones y recomendaciones sobre esta cuestión que figuran en los informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, especialmente las contenidas en los informes de 2003 y 2004 (E/CN.4/2003/13 y E/CN.4/2004/13).

92. El Relator Especial exhorta al Gobierno a que ponga fin al fenómeno de la estigmatización, que en sí representa una grave violación de los derechos humanos y que exacerba la violencia y el resentimiento. El Gobierno debería adoptar medidas adecuadas para evitar la estigmatización, especialmente por parte de sus altos funcionarios, y la polarización de opiniones, dos elementos que envían el debate político y menoscaban el ejercicio del pluralismo.

93. El Relator Especial insta al Gobierno a que ponga en libertad a todas las personas que no hayan participado en la comisión de actos de violencia y que hayan sido encarceladas por sus opiniones o creencias, o por pertenecer a un grupo indígena o a otro grupo vulnerable.

94. El Relator Especial exhorta al Gobierno a que establezca un fondo de indemnización para las víctimas del conflicto, cualquiera que sea su afiliación u orientación política. Los casos de periodistas y empleados de los medios de comunicación deben ser examinados con detenimiento e imparcialidad con miras a la concesión de indemnizaciones con cargo a los recursos de dicho fondo.

95. El Relator Especial insta al Gobierno a que vele por que todos los grupos étnicos tengan acceso a información exhaustiva e imparcial y tengan la posibilidad de expresarse libremente, independientemente de su condición socioeconómica. Como parte del ejercicio de su derecho a la libertad de opinión y de expresión, los pueblos indígenas y otros grupos étnicos deben poder participar en los procesos de adopción de decisiones que afecten a sus vidas y entornos.

96. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció, por invitación del Gobierno, una oficina en Colombia en 1997. Cada año la oficina prepara un informe que incluye recomendaciones equilibradas y bien centradas respecto de la protección y la promoción de los derechos humanos en el país. El Relator Especial alienta encarecidamente al Gobierno a analizar cuidadosamente el contenido de esos informes anuales y a considerar seriamente la posibilidad de adoptar las recomendaciones contenidas en ellos.

Apéndice I

LISTA DE PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES

Fernando Santos Calderón; Vicepresidente de la República

Carolina Barco, Ministra de Relaciones Exteriores

Martha Elena Pinto de Hart, Ministra de Comunicaciones

Francisco Rojas Birry, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado

Carlos Moreno de Caro, Senador, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado

Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de los Derechos Humanos

Rafael Bustamante, Director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior

Mónica Fonseca Jaramillo, Directora del Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Ministerio de Relaciones Exteriores

Volmar Pérez, Defensor del Pueblo

Paula Gaviria, Directora de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo

Maria Victoria Polanco, Directora de Acceso y Desarrollo Social, Ministerio de Comunicaciones

Ricardo Luque, Asesor y Director General de Salud Pública y Coordinador del programa de prevención del SIDA del Ministerio de la Protección Social

Ana Cristina González, Directora General de Salud Pública, Ministerio de la Protección Social

Andrés Fernando Ramírez Moncayo, Vicefiscal General

Yolanda Sarmiento, Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación

Elba Beatriz Silva, Jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación

La Corte Constitucional

Micheal Frühling, Director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Amerigo Incalcaterra, Director Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El Tiempo

El Espectador

Semana

Contravia

VOZ

R.C.N. TV

Fundación para la Libertad de Prensa

Federación Interamericana de Prensa: Centro de Solidaridad con los Periodistas de Colombia

Círculo de periodistas de Bogotá

ANDIARIOS

Medios para la Paz

Instituto Prensa y Sociedad

ASDEH (Asociación Democrática para la Defensa de los Derechos Humanos)

Movimiento Cristiano

Partido Comunista Colombiano

Alternativa Democrática

Planeta Paz

Polo Democrático

Comisión Colombiana de Juristas

Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad Nacional de Colombia

Apéndice II

TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS RATIFICADOS POR COLOMBIA

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: firmado el 21 de diciembre de 1966; ratificado el 29 de octubre de 1969.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: firmado el 21 de diciembre de 1966; ratificado el 29 de octubre de 1969.

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: firmado el 21 de diciembre de 1966; ratificado el 29 de octubre de 1969.

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Colombia se adhirió el 5 de agosto de 1997.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial: firmada el 23 de marzo de 1967; ratificada el 2 de septiembre de 1981.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: firmada el 17 de julio de 1980, ratificada el 19 de enero de 1982.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer: firmado el 10 de diciembre de 1999.

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: firmada el 10 de abril de 1985; ratificada el 8 de diciembre de 1987.

Convención sobre los Derechos del Niño: firmada el 26 de enero de 1990; ratificada el 28 de enero de 1991.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía: firmado el 6 de septiembre de 2000.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados: firmado el 6 de septiembre de 2000.

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares: Colombia se adhirió el 24 de mayo de 1995.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: firmado el 10 de diciembre de 1998; ratificado el 5 de agosto de 2002.
